

## EL DERROCAMIENTO

### GONZALO MARTNER FANTA

Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de París X.

Director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad de Santiago de Chile.

El 11 de septiembre de 1973 se produjo el derrocamiento de un gobierno democrático legítimo, seguido de una represión violenta, en manos de una dictadura militar que duró cerca de 17 años. Esta fue apoyada por la derecha civil, la cual incluso se propuso prolongarla, al menos, hasta 1997, con Pinochet a la cabeza. El intento de legitimación del dictador fue derrotado en el plebiscito de 1988 y, en 1990, se inició un largo curso hacia una recuperación democrática.

Los puntos de vista más serenos sobre el episodio de 1970-1973, crucial y trágico de la historia de Chile, no han sido los más frecuentes. Más bien, siguen arremolcando desde los sectores conservadores las descalificaciones del proyecto histórico del gobierno de Salvador Allende y la experiencia transformadora que llevó a cabo bajo una lógica de ampliación de la soberanía nacional y de redistribución democrática del poder. Asimismo, persisten los esfuerzos por negar la vigencia del ejemplo de consistencia y dignidad del presidente Allende. Para aquel sector de la sociedad, es insalvable que Allende, como el presidente Balmaceda en 1891, no se rindiera ante la fuerza y señalara ante la historia «pagaré con mi vida la lealtad del pueblo» —y así lo hiciera. Los conservadores insisten en querer destruir su imagen y minimizar su trascendencia política, mientras los argumentos más ilustrados de ese sector (Mansuy, 2023) oscilan entre la idea del fracaso de Allende y la no vigencia de su proyecto.

#### El Plan de Allende

*El plan de gobierno de Salvador Allende incluía realizar cambios económicos estructurales y respetar y ampliar la institucionalidad democrática (Garcés, 2013; Martner, 1988).* El compromiso con la institucionalidad se mantuvo desde el primer hasta el último día de su administración. No obstante, hacia 1973, una mayoría del parlamento y un poder judicial conservador y politizado se sumaron a declarar lo contrario para precipitar un golpe de Estado, sin que, por lo demás, les pasara absolutamente nada. El hecho básico es que *existió entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 un régimen de plenas libertades y de separación de poderes, en medio de un agudo conflicto social y político.* Hay quienes reconocen este hecho, pero postulan que el propósito final del gobierno de

Allende era terminar con la democracia y establecer un régimen pro-soviético, lo cual era lo que supuestamente había que impedir mediante un golpe militar. Esto no tiene sustento en los hechos, aunque en la izquierda hubiera partidarios de acciones extralegales; pero, no eran quienes tomaban las decisiones gubernamentales.

Las transformaciones en la economía incluyeron, en primer lugar, completar la *nacionalización del cobre*, iniciada parcialmente bajo el gobierno de Eduardo Frei, aprobada por la unanimidad del parlamento. La finalidad consistía en que sus excedentes fueran utilizados en la industrialización del país y en mayor bienestar social a sus habitantes, dejando de ser rentas transferidas al exterior. En segundo lugar, se incluyó también concluir la tarea iniciada por el gobierno de Eduardo Frei en 1967 para *terminar con el latifundio y el inquilinaje semi-feudal*, fuertemente resistida por la derecha representada por el Partido Nacional. Aunque permaneció, en un sector de la sociedad, la «cultura de la hacienda», heredada de la colonia, este tipo de organización productiva desapareció del mapa económico chileno; sin embargo, no fue en beneficio del campesinado, que sufrió una represión generalizada después de 1973, sino de una revolución empresarial exportadora que, décadas más tarde, lograría un gran dinamismo. Estos son los dos principales legados del gobierno de Salvador Allende, junto a proceso de participación popular sin precedentes.

Ahora bien, en cambio, lo que creó fuertes controversias fue *la nacionalización de la banca* mediante la compra de acciones en la Bolsa junto con *la creación de un sector industrial y de distribución estatal* mediante intervenciones. Sus alcances no lograron tampoco un consenso al interior de la coalición de gobierno. El plan gubernamental, que demoró en definirse, era *la conformación de un sector acotado 91 empresas públicas que sustentara un nuevo proceso de expansión productiva*, como lo había hecho la creación de empresas por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO, fundada por el gobierno del Frente Popular en 1939) durante el proceso de sustitución de importaciones a partir de 1940 en adelante. Con esto, no se buscaba eliminar los mercados, aun cuando se utilizara control de precios, sino afianzar una planificación de la inversión pública y la expansión industrial para un mayor desarrollo de largo plazo. A corto plazo, el aumento de salarios debía impulsar el crecimiento de la economía usando las capacidades instaladas ociosas, ampliadas recientemente por los planes de estabilización antiinflacionaria de la administración Frei.

### **“Make the Economy Scream”**

La reactivación salarial y de gasto público permitió una expansión productiva y una disminución del desempleo, lo que dio la mayoría de votos a las fuerzas de gobierno en las elecciones

municipales de 1971, en un clima inicial favorable. Sin embargo, *Allende debió actuar frente a un plan de derrocamiento interno y externo que se inició antes de su llegada al gobierno*. En 1970, un acuerdo con la Democracia Cristiana (DC) había permitido llegar a La Moneda el 3 de noviembre con el voto ratificadorio de su primera mayoría relativa (36,6%) obtenida en las urnas el 4 de septiembre, en competencia con los candidatos Jorge Alessandri (derecha) y Radomiro Tomic (DC). El 24 de octubre obtuvo, en Congreso Pleno, 152 votos contra 35 a favor de Alessandri. Ahora bien, este apoyo fue obtenido en contra de la expresa intervención norteamericana, la cual buscó que la DC votara a favor de Alessandri<sup>1</sup>. El entonces presidente de Estados Unidos (EE. UU.) Richard Nixon, quien mantenía un drástico rechazo a la creación de «una segunda Cuba» en América Latina, y su asesor de seguridad nacional Henry Kissinger, quien preveía de manera bastante extravagante posibles efectos de la fórmula de Allende en Chile en la situación de Italia y Francia, consideraron inadmisibles la llegada de Allende en Chile al gobierno para sus intereses estratégicos. Ambos ordenaron crear las condiciones para el derrocamiento inmediato a través de un golpe de Estado militar, aun cuando informes de inteligencia cuales señalaban que «Estados Unidos no tiene intereses nacionales vitales en Chile»<sup>2</sup>. Su enfoque extremo de guerra fría los llevó a promover, en octubre de 1970, el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider como motivo para provocar un golpe de Estado; esto terminó con su asesinato por un comando ultraderechista, en consonancia con la voluntad conspirativa de la derecha y, en alguna medida, del sector seguidor de Eduardo Frei en la DC. Este sector, asimismo, consideró que un golpe de Estado y un breve régimen militar constituían un mal menor frente al mal mayor de caer en la esfera de influencia soviética y perder las libertades (sus razonamientos están descritos en Aylwin (2023), quien, sin embargo, siempre negó una voluntad

---

<sup>1</sup> El Informe la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su acrónimo en inglés) del 18 de noviembre de 1973, refiere a esto. Disponible en: <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc01.pdf>

<sup>2</sup> En el memorando secreto de la CIA, en 7 de septiembre de 1970, se lee: «la expansión de la presencia soviética en Chile podría ocurrir de muchas maneras diferentes, pero creemos que el establecimiento de una presencia militar soviética permanente de gran envergadura es improbable, aunque no imposible. También creemos que Allende probablemente —y casi con certeza durante el período en que intenta consolidarse— evitaría los riesgos de una subversión chilena discernible en otros países. En cuanto a las amenazas a los intereses de EE. UU., concluimos que; (1) EE. UU., no tiene intereses nacionales vitales en Chile. Sin embargo, habría pérdidas económicas tangibles; (2) el equilibrio militar mundial no se vería alterado significativamente por un gobierno de Allende [*by an Allende government*]; (3) una victoria de Allende, no obstante, generaría considerables costos políticos y psicológicos: (a) la cohesión hemisférica se vería amenazada por el desafío que un gobierno de Allende representaría para la OEA [Organización de Estados Americanos] y por las reacciones que provocaría en otros países, sin embargo, no vemos una amenaza probable para la paz de la región; (b) una victoria de Allende representaría un claro revés psicológico para EE. UU., y un avance psicológico definido para la idea marxista [*a definite psychological advance for the Marxist idea*]» (s/p).

Disponible en: <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve16/d18>

golpista activa, a pesar de apoyar el golpe al día siguiente (12 de septiembre, 1973) y autorizar la participación de personeros de la DC en la etapa inicial de la dictadura). Así también, parte de la DC se opuso a todo acuerdo: fue el caso del aproximado en 1972 sobre las áreas de propiedad; fue la reafirmación de tal oposición cuando, en abril de 1973, Frei recuperó el control del partido, desplazando al sector progresista más abierto a algún entendimiento. Esta posición fue reprochada a Frei por otro líder histórico de la DC, Bernardo Leighton (quien fue exiliado y objeto de un atentado por el régimen de Pinochet<sup>3</sup>). Con el tiempo, Eduardo Frei fue decantando una postura de oposición a la dictadura, lo cual se tradujo en su pronunciamiento expreso en contra de la Constitución de 1980. Su muerte se produjo en condiciones que podrían haber incluido un envenenamiento en 1982.

Para el gobierno de Allende, estabilizar la economía después de los primeros cambios estructurales era fundamental en las condiciones chilenas de la época, con *un gobierno sin mayoría parlamentaria, acosado desde dentro y fuera con efectos que amenazaban ser devastadores*. La economía chilena «gritó», tal como fue la orden dada tempranamente en septiembre de 1970 (*“make the economy scream”*) por el presidente Nixon a la CIA<sup>4</sup>. El gobierno de Estados Unidos cortó el crédito

---

<sup>3</sup> En palabras de Bernardo Leighton (1975), en una carta dirigida a Eduardo Frei: «para ti el golpe resultaba inevitable, al paso que para mí siempre fue evitable y nos obligaba a hacer lo inhumano por evitarlo». Leighton sostenía: «las conversaciones oficiales del Gobierno con la DC, por iniciativa del primero, en el invierno del año 72, sobre el área de propiedad social, la participación laboral, las intervenciones en las empresas, las empresas de trabajadores, etc., en base a [sic] proposiciones del Gobierno y nuestras, llegaron a concretarse en acuerdos que, en opinión de la Comisión que nombramos para el trabajo respectivo, cubrían más del setenta por ciento de las materias en debate» y que, «a pesar de todo, después del fracaso de las conversaciones Allende- Aylwin, se reiniciaron conversaciones privadas, con conocimiento y aceptación de Patricio [Aylwin] (quien no puede haber dejado de informarte), entre personeros del Gobierno y de la DC. Renán [Fuentelba] y yo estuvimos como interlocutores, fuera de dirigentes, universitarios, profesionales y gremiales pertenecientes a la DC. Mediante estas conversaciones, en que participó con singular empeño Carlos Briones, se lograron soluciones en el problema del Mineral de [El] Teniente, en la huelga de los médicos, en el conflicto del Canal 9 de TV [sic], en las dificultades producidas en el escalafón del Ministerio de RR. EE. [Relaciones Exteriores], y se adelantó una fórmula para la promulgación de la reforma constitucional y para la dictación de la ley sobre distribución alimenticia. Como es lógico, de los hechos precedentes tuvieron conocimiento, según el caso, el Consejo Nacional del Partido y Patricio Aylwin». Concluyo Leighton: «Cuando te pedí que fueras a hablar con Allende, alrededor de unos diez días antes del golpe, yo conocía las condiciones que habías puesto en mayo para celebrar una entrevista con él. No es el momento de discutir si fueron o no las más adecuadas. Sólo que, en septiembre, las circunstancias se habían tornado bien diferentes, y Allende y tú, por las funciones que desempeñaban y el ambiente público que influenciaban, eran las únicas dos personas en el país capaces de hacer con éxito el supremo esfuerzo para evitar lo peor. Quizás Allende debió dar el primer paso; pero, yo en lugar tuyo no lo habría esperado. Lo que estuviste de acuerdo que hiciera Aylwin pudiste haberlo hecho tú, seguramente en condiciones cien veces más cargadas de posibilidades de éxito».

<sup>4</sup> Referencia a la desclasificación de las notas tomadas por Richard Helms, director de la CIA, en reunión con Richard Nixon en 15 de septiembre de 1970.

Disponible en: <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc26.pdf> Para un recuento de la documentación desclasificada sobre la intervención de Estados Unidos en Chile contra el gobierno de Allende: Kornbluh (2023).

externo propio y multilateral, estranguló las importaciones y dificultó la comercialización del cobre chileno en los mercados mundiales, como represalia por la expropiación de este mineral (incluyendo un descuento en la indemnización por utilidades excesivas que las redujo a cero (Senado de Estados Unidos, 1975 [link](#))). No se produjo nada semejante a un apoyo externo sustitutivo como el proporcionado por la Unión Soviética a Cuba, cuya situación geoestratégica era completamente distinta. La Unión Soviética no apoyaba sino en alguna medida a Allende, tal como pudo constatarlo en su visita a Moscú a fines de 1972, entre otros, porque su modelo difería del régimen de partido único y la completa centralización económica soviéticos, más allá de la buena relación de esta potencia de la guerra fría con el Partido Comunista chileno —al que apoyaba financieramente desde hacía décadas, según los archivos soviéticos (Uliánova y Fediakova, 2023), y que era importante entre los partidos comunistas occidentales.

Una parte de la izquierda consideró que los intentos de golpes de Estado serían recurrentes y se debía, por tanto, «acumular fuerzas» para enfrentarlos. Esto implicaba subir salarios, ampliar el número de empresas bajo control gubernamental y las expropiaciones de explotaciones agrícolas, incluyendo la recuperación de tierras históricamente expoliadas a las comunidades mapuche en la zona de Cautín<sup>5</sup>. Si bien la presión redistributiva era legítima y, en todo caso, una realidad, debía ser canalizada, orientada y compatibilizada con la estabilización de lo logrado en materia de redistribución de ingresos, reforma agraria y nacionalización del cobre, lo cual suponía una conducción política en tal sentido por parte de los partidos de gobierno. El Partido Socialista (PS) y los partidos recientemente escindidos de la DC (Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU e Izquierda Cristiana IC) —desde fuera el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), creado en 1965 con una postura crítica a la estrategia de conquista electoral del gobierno encabezado por Allende— estimularon la «*revolución desde abajo*» que derivó hacia presiones salariales y ocupaciones de unidades productivas, con secuelas de interrupciones de suministro; esto llevó a controles generalizados de precios,

---

<sup>5</sup> El autor de este artículo contaba con 16 años para 1973 y discutía con su padre (colaborador desde los años cincuenta y ministro de Planificación del presidente Allende entre 1970 y 1973) con el argumento hipotético-deductivo, considerado irrefutable, según el cual se produciría inevitablemente un golpe de Estado, dados los cambios impulsados por el gobierno y los intereses que afectaba. Pensaba que sólo quedaba prepararse para enfrentarlo por sobre cualquier otra consideración y que no resultaría intentar estabilizar el proceso democrático. El padre, Gonzalo Martner García, fue uno de los que concibió una secuencia gradual de cambios económicos en un horizonte de seis años; construyó las bases de un acuerdo con la DC en el parlamento sobre el área de propiedad social en 1972 (después desechado por Eduardo Frei y la directiva de la DC); y fue uno de los redactores del discurso presidencial nunca pronunciado, el cual se llamaba a plebiscito sobre las áreas de propiedad social (la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba), para el 11 de septiembre de 1973, tal como se detalla en Martner (2023).

escasez de productos básicos y al desarrollo del mercado negro. Lo anterior hizo muy difícil lograr un ordenamiento económico posterior al impulso inicial transformador de 1971: estabilización buscada por Allende y la mayoría de sus equipos de gobierno, pero con el apoyo de sólo una parte de la coalición que daba sustento, a saber, los partidos Radical (PR) y Comunista (PC).

Se ha puesto poco el acento en la magnitud de la «revolución desde abajo» entre 1967 y 1973, es decir, entre los gobiernos de Frei y Allende, tal como lo documenta Winn (2013). Esta presión social se había intensificado con la reforma agraria, iniciada en 1967, y se extendió a empresas de diverso tipo, empujada por aquella parte de la izquierda y de grupos escindidos de la DC, los cuales hicieron equivaler como avances hacia el socialismo estatizar cualquier empresa y, en particular, aquellas sospechosas de boicot de suministro de productos de consumo y desvío al mercado negro. Las intervenciones de empresas, justificadas por algunos bajo el concepto de «control obrero» y de construcción de «poder dual», no respondían a diseños con alguna coherencia económica sectorial y de conjunto; de hecho, se realizaron en oposición al propio presidente Allende y a parte de los equipos de gobierno. La expansión inorgánica del «área de propiedad social», mediante tomas seguidas de decreto de intervención legal provisionales para asegurar la continuidad del abastecimiento, produjo un desborde de la reactivación económica de corto plazo basada en una expansión salarial que debía ser gradual. La meta de participación de los salarios en el ingreso nacional programada para 1976 se alcanzó en 1971. Más aún, se llegó al orden de 500 empresas bajo control de gobierno en 1973, donde las planillas salariales se expandieron y se financiaron por emisión monetaria, lo cual alimentó la inflación; la intervención no programada de empresas de distinto tamaño se constituyó en un factor de desequilibrio fiscal y monetario, además de rupturas productivas, con una probabilidad limitada de sustituirlas por importaciones, en medio de un amplio aumento del consumo; y se sumaron reajustes salariales del sector público no financiados, dada la negativa de la oposición en el parlamento para permitir la recaudación de los ingresos respectivos. Aprobar gastos mas no los ingresos propuestos por el gobierno para su financiación sería calificado hoy de populismo por todo el sistema político —sin embargo, es lo que la oposición hizo de modo sistemático en el parlamento de entonces.

El presidente Allende y sus equipos se empeñaron en estabilizar la situación económica, pero *sin renunciar a la nacionalización del cobre, a la reforma agraria y a la creación de un núcleo de empresas industriales y de distribución socializadas* que permitieran sostener un proceso de inversión y abastecimiento de productos básicos que redundaran en aumentos del bienestar de la mayoría social a largo plazo. Su diagnóstico fue: se debe estabilizar el proceso de cambios, contener las

desorganizaciones productivas propias de transferencias de propiedad de gran magnitud y evitar una «huelga empresarial» generalizada como Michal Kalecki (1943) pronosticaba en situaciones de este tipo.

**Tabla N°1.**

*Datos Macroeconómicos 1967-1976*

Año	Producto Interno Bruto	Demanda Interna	Formación Bruta de Capital Fijo	Consumo y Resto Demanda Interna	Exportaciones	Importaciones	Inflación	Desempleo
1967	3,6	1,9	2,1	1,9	3,3	-9,2	21,9	4,2
1968	3,6	4,5	9,5	3,6	2,0	9,1	29,7	4,4
1969	4,1	5,5	5,0	5,5	3,6	14,1	29,3	5,0
1970	1,7	1,5	6,5	0,6	2,1	1,0	34,9	5,1
1971	9,6	10,6	-2,3	13,1	0,8	8,5	22,1	3,3
1972	-0,7	1,2	-20,1	5,2	-15,1	3,2	163,4	2,5
1973	-5,0	-5,8	-6,0	-5,7	2,8	-5,4	508,1	4,3
1974	1,2	-4,0	19,1	-7,6	45,9	3,4	375,9	8,7
1975	-12,3	-19,9	-22,8	-19,3	2,4	-38,5	340,7	14,0
1976	3,6	-0,9	-14,8	2,2	24,3	4,2	174,3	13,9

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de Banco Central de Chile y Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.

En el balance económico, la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB) fue de un crecimiento inicial de 9,6% para 1971, seguido de una caída de -0,7% hacia 1972 y otra de -5,0% en 1973 (en comparación, considerando que al cuarto trimestre de este último año la Junta Militar tomó el poder, esta aplicó una política recesiva). La producción minera, manufacturera, constructora y agrícola bajó, aunque en cifras, en todo caso, inferiores a las registradas en las crisis de 1975 y 1982-1983; la capacidad de exportar disminuyó y aumentó la demanda por importaciones de alimentos e insumos, lo cual se tradujo en el desabastecimiento generalizado de productos. La inversión cayó en los tres años, a pesar del inicio de la construcción de 120 mil viviendas. Con todo, sin embargo, *el crecimiento promedio del PIB entre 1971-1973 fue de 1,3%* y reflejó la expansión del consumo interno el cual no fue sostenible en los dos años siguientes. El Índice de Precios al Consumidor tuvo un relativamente buen resultado en 1971; sin embargo, en 1972, se zanjó un debate interno con un nuevo equipo económico que decidió una brusca política de ajustes de precios que afectó los salarios reales; los controles fueron eliminados también por la Junta Militar después del golpe: la inflación en 1973 ascendió a 508%. Una contrapartida positiva fue que *el desempleo llevó a los niveles más bajos en la historia contemporánea de Chile, mientras las familias más pobres lograron acceder al consumo*

*de bienes básicos como nunca.* Por último, a pesar de la crisis de 1972-1973, el PIB en 1973 fue superior al de 1970, según las cifras actuales del Banco Central.

### El Desenlace

El Presidente Allende fue un conductor político que actuó en una situación extremadamente adversa y realizó ingentes esfuerzos para hacer posibles los cambios que consideraba indispensables en la sociedad chilena, estabilizándolos en los límites de la democracia. *Allende buscó, desde 1971, que un plebiscito consolidara las reformas estructurales que emprendió* (Garcés, 2013); dígase, reformas como extender la nacionalización del cobre, culminar la reforma agraria, conforme un área bancaria, industrial y distributiva de carácter estatal y aumentar la participación del trabajo en el ingreso nacional. En la idea de estabilización a través de la legitimación democrática, su propio partido y principal de la coalición (Unidad Popular, UP), el PS, junto con el MAPU y la IC no lo acompañaron. El PC no apoyó el plebiscito salvo días antes del 11 de septiembre de 1973, el cual el presidente Allende había vuelto a proponer como salida a la crisis política y que anunciaría, precisamente, tal día donde se produjo el golpe de Estado.

La reticencia de la dirección del PS, su propio partido, no ayudó al esfuerzo política del presidente Allende: este no buscó acuerdos amplios ni ofreció una alternativa distinta a la radicalización ante la perspectiva de un golpe de Estado, pero sin soporte en alguna fuerza militar defensiva propia que tuviera alguna significación (aunque tampoco preparara un asalto al poder). El sector más radical, en cambio, era crítico de la democracia parlamentaria y tenía como referencia la Revolución Cubana, pesen las condiciones sustancialmente diferentes<sup>6</sup>. Como conjetura de la izquierda radical, la idea de acumulación de fuerzas frente al golpismo podía aspirar a construir milicias, apostando a una eventual división de las Fuerzas Armadas (la cual sólo podía ser muy aleatoria) y, por consiguiente y si acaso, desembocar en una guerra civil. Allende siempre se propuso evitar este escenario: observaba a un país rodeado de vecinos hostiles gobernados por dictaduras militares y la manifiesta intención del gobierno de la principal potencia, Estados Unidos, en hacer todo lo posible para su derrocamiento; dígase, no había una ayuda internacional significativa.

La «revolución desde abajo» y los embates opositores llevaron a que *se excediera con creces el objetivo redistributivo buscado inicialmente por el gobierno* y se generara una espiral de precios-

---

<sup>6</sup> No por casualidad Ernesto Guevara tuvo un diseño de construcción de bases logísticas para Chile y Uruguay, pero nada semejante a que, en estos países a la sazón democráticos, se generaran procesos de lucha armada como los promovidos en el resto del continente (Bustos, 2007).



salarios alimentada por un masivo boicot empresarial y cuellos de botella productivos. A la postre, la espiral precios-salarios llevó a una situación paradójica: *el consumo popular aumentó sustancialmente* respecto a los años previos, pero su acceso se hizo en condiciones de racionamiento y dificultad cotidiana en el abastecimiento; a esto se sumaba, pues, percepciones generalizadas de amenaza a la pequeña y mediana empresa, con la consiguiente *erosión del apoyo social y político al gobierno*. Esta dinámica no ayudó, por tanto, a construir una alianza del mundo obrero, campesino y la marginalidad urbana y rural, cuyos intereses el gobierno procuraba representar, con los sectores medios del funcionariado, los estamentos profesionales y técnicos, propietarios de pequeñas y medianas empresas y alguna parte de la gran empresa vinculada al mercado interno. Es que esta alianza era indispensable para enfrentar la reacción de los afectados por los cambios promovidos por el gobierno de la UP: *antes que «acumularse», las fuerzas gubernamentales se fueron «desacumulando»*, proceso coadyuvado por la desorganización económica y la radicalización de una parte de la izquierda con un soporte que sólo podía tener como base la ocupación o control de fábricas, campos y algunos territorios por parte de los trabajadores. Aun así, no obstante, la adhesión al gobierno se mantuvo en 44,5% del electorado para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, considerando el 50,3% de las municipales de 1971 y la inicial presidencial de un 36,6% en 1970.

La oposición logró movilizar activamente contra el gobierno de Allende a amplios sectores medios e incluso obreros (en la minería nacionalizada) en un proceso de insurrección rampante. A esto se sumó una estrategia de parálisis progresiva del país, cuya táctica se desplegó en centenares de atentados con bombas (realizados por la extrema derecha civil<sup>7</sup>) y la paralización del transporte y los servicios además de paralizaciones y huelgas estimulados por la cúpula empresarial. En esto, hubo apoyo por parte de los servicios de inteligencia de la Marina y financiación por las operaciones encubiertas desde EE. UU. Todo esto terminó por debilitar social y políticamente al gobierno<sup>8</sup>.

Allende y sus aliados pensaban que debían construirse fortalezas políticas e institucionales que aislaran al golpismo interno y externo, reduciéndolo a expresiones minoritarias contenibles por las instituciones democráticas, el constitucionalismo militar y las alianzas externas amplias. No debe olvidarse que Allende se empeñó hasta el final en lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito que no alcanzó a anunciar (Garcés, 2013) y que hubiera preservado, con una cierta

---

<sup>7</sup> La casa del autor de este artículo fue atacada, dada la posición por parte del padre en el gobierno de Allende, con una bomba de alto poder destructivo colocada por la organización ultraderechista Patria y Libertad. Este acontecimiento ocurrió en la noche del 2 de septiembre de 1973.

<sup>8</sup> Para una descripción de este proceso, se recomienda el documental *La Spirale* (1976), dirigido por Armand Mattelart, Jacqueline Meppiel y Valérie Mayoux.

probabilidad de éxito, la institucionalidad democrática chilena y, eventualmente, creado una dinámica de recomposición de la izquierda sobre la base de un procesamiento racional de las radicalizaciones en curso<sup>9</sup>. Esto incluía la idea de un reemplazo en la dirección del PS en marzo de 1974 considerando su próximo congreso (lo que la división del MAPU, en marzo de 1973, fue su anticipación). Sin embargo, *nunca se sabrá si la convocatoria a un plebiscito hubiera evitado el golpe militar —que la oposición tenía buenas opciones de ganar y cuyos resultados el presidente Allende iba a aceptar, fueran o no favorables para su gobierno*. En el último caso, las elecciones presidenciales se hubieran adelantado.

Las fuerzas que Allende enfrentó terminaron siendo más poderosas: lograron el derrocamiento violento de su gobierno, tal como habían pretendido desde noviembre de 1970. El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968 como lo reseña el general Prats en sus *Memorias* (1985), ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas. El mando militar había aceptado, desde octubre de 1972, su integración al gabinete del gobierno de Allende: esto fue atacado por la derecha política, la facción vinculada a Eduardo Frei en la DC, y militares como los generales Arellano Stark y Bonilla. La presión culminó en la renuncia el 23 de agosto de 1973 del Comandante en Jefe del Ejército, el general Prats, y el nombramiento en su sucesión del general Pinochet, postrera traición al considerarse supuestamente constitucionalista. Así, para el golpe, dos de los cuatro comandantes en jefes (Marina, con el almirante Montero, y Carabineros, con el general Sepúlveda Galindo), se mantuvieron leales a la Constitución y su juramento de defenderla. En 1974, Pinochet mandó a asesinar a Carlos Prats en su exilio, en Buenos Aires.

### Lecciones

El gobierno de la UP quedó preso de la lógica implacable de la guerra fría, mientras que, internamente, no logró canalizar la dinámica social y política ni evitar *una crisis de transición al intentar*

---

<sup>9</sup> En los días previos al golpe, Allende se reunió con Miguel Enríquez, secretario general del MIR. El primero expuso su plan de salida de la crisis vía plebiscito y solicitó no interferir: el segundo aceptó y comunicó a los dirigentes del MIR. Esta fue la razón por la cual el MIR no estaba en «estado de alerta» para el día del golpe, a diferencia de los meses previos. Con anterioridad, en la noche del 29 de junio tras el intento de golpe («Tanquetazo»), soldados de la base aérea de [EI] Bosque ofrecieron al MIR sustraer una importante cantidad de armas: Enríquez se negó por considerar que, si llegara a ser un operativo exitoso, había el alto riesgo de desencadenar el temido golpe de Estado en medio de una amplia disparidad de fuerzas si el Ejército no se quebraba. En su opinión, en aquel momento, la salida a la crisis no podía basarse sólo en la acción de milicias armadas reforzadas (como las pocas que su organización había logrado crear) y, por esto, no hubo interferencia a la salida plebiscitaria de Allende. No obstante, con el golpe culminado, Enríquez resistió el golpe con la pequeña fuerza que disponía: se negó a salir del país y fue acibillado en un asalto a su casa clandestina el 5 de octubre de 1974. El MIR sufrió 579 víctimas de desaparición forzada y ejecuciones durante la dictadura.

*de modo simultáneo una reactivación productiva, una redistribución de ingresos y una transformación de las estructuras de propiedad.* La estabilización post-1971 era perentoria frente a la temprana decisión norteamericana de derrocar a Salvador Allende por todos los medios a su alcance. En materia económica, la expansión excesiva de la demanda no encontró correlación en una oferta en plena reestructuración, sometida a una restricción externa promovida activamente por EE. UU. La política de reactivación salarial excesiva terminó en presiones inflacionarias y pérdidas de poder adquisitivo, lo cual coadyuvó a la oposición de derecha, de la DC y de gremios empresariales para movilizar amplios sectores medios que prestaron soporte social al golpe de 1973. Llevar a cabo «reformas estructurales transformadoras» debía tener límites que permitieran evitar desbordes desestabilizadores y mantener una mayoría social y política viable para la continuidad democrática. Ahora bien, cabe hacer notar que la democracia también se derrumbó, por distintas razones, en Uruguay y Argentina, al par que dictaduras militares de distintas duraciones y características prevalecían en Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador —en América del Sur, las formas democráticas sólo se mantuvieron en Colombia y Venezuela.

El derrocamiento del gobierno de Allende tuvo consecuencias dramáticas en la historia de Chile. Aquel fue seguido por una prolongada dictadura que provocó no sólo miles de muertes, sino también una restauración histórica del poder oligárquico que estaba siendo cuestionado por diversos impulsos progresistas y democratizadores desde la década de 1920. Ahora bien, *la derrota no constituyó un fracaso del núcleo del proyecto de cambios* que inspiró al gobierno de Allende, a saber: mayor soberanía nacional sobre los recursos naturales y sectores estratégicos; socialización de vehículos de inversión para impulsar un desarrollo que beneficiara a las mayorías trabajadoras, redujera desigualdades de ingreso y de riqueza al par aumentara oportunidades de prosperar y lograr una expansión de las políticas de cobertura social frente a la pobreza y la precariedad. Este proyecto siguió adelante bajo otras formas y ritmos, con otras alianzas políticas y sociales, a partir de un espíritu de resiliencia y resistencia que se inscribe en las luchas sociales y democráticas que han sido, desde la independencia, parte recurrente de la historia de Chile.

Después del golpe de Estado, la normalización productiva, seriamente afectada por las paralizaciones por razones políticas del transporte privado y un amplio número de unidades productivas en todo el tejido económico, así como el fin del estrangulamiento del crédito externo, permitieron un crecimiento de 1,2% del PIB en 1974, pero todavía con una inflación de 376% anual. Posteriormente, sobrevino en 1975 la peor crisis económica de Chile en su historia contemporánea, mucho más aguda que la de 1972-73. Hay quienes la atribuyen a secuelas de la UP, lo que es tan erróneo

como atribuir la recesión de 1972-1973 a las secuelas de la gestión previa de Frei. Lo que ocurrió es que, en 1975, frente a una inflación aún muy elevada, Pinochet le hizo caso a la recomendación que vino a darle personalmente Milton Friedman en marzo de 1975:

Existe sólo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal<sup>10</sup>.

El argumento fue llevado al extremo por el monetarismo de choque de los ministros *Chicago Boys* a quienes Pinochet entregó todo el poder a partir de abril de 1975. Estos provocaron una depresión de gran magnitud, con una caída del PIB de  $-12,3\%$  en tal año fruto de una reducción de  $-19,9\%$  de la demanda interna provocada por el drástico recorte del gasto público y del crédito. Hacia 1976, el nivel del PIB era inferior al de 1973 y similar al de 1969. Desde allí hasta 1981, la economía chilena experimentó un crecimiento, aunque nuevamente mediante una fuerte expansión de la demanda interna y también de las exportaciones. A pesar de la política de choque de 1975, la inflación bajó de un dígito recién en 1981, pero más bien gracias a la fijación del tipo de cambio nominal en 39 pesos en 1979 y la culminación de la apertura comercial y financiera al exterior. Esta política tuvo el costo de provocar la otra gran depresión 1982-1983, con  $-11,5\%$  y  $-5,6\%$  de caída del PIB respectivamente. *Aunque la recesión de 1972-1973 fue significativa, fue menor a las dos depresiones provocadas por los Chicago Boys en dictadura, lo que ocurrió sin lograr disminuir las presiones inflacionarias sino por tiempos breves.* En 1990, al iniciarse la transición democrática, la inflación todavía ascendía a  $27,1\%$  anual. Este síntoma estructural de la economía chilena, arrastrado por décadas, fue resuelto por los gobiernos democráticos en la última década del siglo XX con una política fiscal disciplinada y acuerdos de reajustes salariales entre gobierno, empresarios y organizaciones sindicales: así, se abatieron las expectativas inflacionarias en un contexto de menor inflación externa y de una estabilidad cambiaria flexible.

Las fuerzas progresistas recogen ahora dimensiones adicionales tales como *el énfasis igualitario en materia de género, el respeto a las disidencias y diferencias y el autogobierno de los pueblos originarios en el espacio nacional*, junto a la tarea de avanzar a una sostenibilidad ambiental que permita la resiliencia de los ecosistemas. Empero, no son dimensiones sustitutivas de las existentes

---

<sup>10</sup> Disponible en: <https://www.economiaysociedad.cl/la-carta-de-friedman-al-presidente-pinochet>

Revista Políticas Públicas, Número Especial, 2023: 53-66

DOI 10.35588/pp.v0iEspecial.6395

Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile

en 1970-1973, especialmente sobre la aspiración colectiva a las libertades civiles y políticas en una democracia basada en la soberanía popular, la prevalencia de la voluntad de la mayoría con respeto a las minorías y la aspiración a una igualdad efectiva de oportunidades y derechos, junto con desarrollar la reciprocidad comunitaria y solidaria en la sociedad. El instrumento principal para quienes comparten el objetivo de desplazar la concentración económica y las desigualdades sociales y de género tampoco ha variado mucho: *la construcción estable de una coalición amplia que exprese a un bloque social y político por cambios progresivos, con vocación mayoritaria, capacidad de entenderse con el centro político y de proveer estabilidad política a lo largo del tiempo.*

La radical restauración del dominio oligárquico entre 1973 y 1989 tuvo que aceptar desde 1990 aceptar modulaciones híbridas que tienen la potencialidad de convertirse por acumulación en un Estado Social de Derecho. Por ello, lo medular de la pugna histórica chilena permanece, aun cuando el dominio oligárquico tradicional haya pasado de la hacienda y la minería, con influencia en la banca, a grupos financieros y productivos hiperconcentrados y más internacionalizados.

Lo que se intenta expulsar por la puerta suele volver por las ventanas y las rendijas. En 2019-2021, se vivió la secuencia de una nueva «revolución desde abajo». Más allá de la explosión social de octubre de 2019 y sus meses siguientes (hasta el inicio de la pandemia por COVID-19), se llegó al desborde de un modelo de seguridad social privada mediante amplios retiros de ahorros individuales de los fondos de pensiones, refrendados por dos tercios del parlamento. Así como ocurrió con los reajustes salariales y las ocupaciones de empresas bajo la Unidad Popular, el gobierno de Piñera perdió parte del control de la política económica, además de aumentar fuertemente el déficit fiscal. En 2021, en el año de la salida de la crisis pandémica, el consumo de los hogares se expandió en nada menos que un 21% con un consumo gubernamental de 14%, mientras la demanda interna lo hizo en 22% y las importaciones en 32%, empujando un crecimiento del PIB en 12%. Sin embargo, según las cifras del Banco Central, en 1971 el consumo de los hogares aumentó en 13%, el consumo de gobierno en 12% y las importaciones en 9%, empujando un crecimiento del PIB también de 9%. Como se observa, la criticada política económica de la UP en medio de un agudo conflicto político no alcanzó a tener la intensidad expansiva del último año de Piñera II. La diferencia crucial es que el bloqueo externo en 1971-1973 no permitió la continuidad productiva, afectada por los cambios de propiedad, y generó rupturas de abastecimiento de productos básicos y una espiral de inflación. Esto reafirma la importancia del bloqueo externo en el desenlace del gobierno de la UP y la necesidad de mantener hoy una inserción externa estable y diversificada como condición para llevar a cabo cualquier proyecto progresista, en el marco de alianzas sociales y políticas internas amplias con vocación

transformadora, pero también con capacidad de construir mayorías sociales y parlamentarias para los procesos de cambios estructurales.

### Referencias

- Aylwin, P.** (2023). *La Experiencia Política de la Unidad Popular 1970-1973*. Debate.
- Bustos, C.** (2007). *El Che Quiere Verte*. Javier Vergara Editor.
- Garcés, J.** (2013). *Allende y la Experiencia Chilena. Las Armas de la Política*. Siglo XXI Editores.
- Kalecki, M.** (1943). Political Aspects of Full Employment, *Political Quarterly*, 14, 347-356.
- Kornbluh, P.** (2023). *Pinochet Desclasificado*. Editorial Catalonia.
- Leighton, B.** (1975). Carta de Bernardo Leighton a Eduardo Frei Montalva (26 de junio de 1975). *Wikisource*.  
[https://es.wikisource.org/wiki/Carta\\_de\\_Bernardo\\_Leighton\\_a\\_Eduardo\\_Frei\\_Montalva\\_\(26\\_de\\_junio\\_de\\_1975\)](https://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_Bernardo_Leighton_a_Eduardo_Frei_Montalva_(26_de_junio_de_1975))
- Mansuy, D.** (2023). *Salvador Allende. La Izquierda Chilena y la Unidad Popular*. Taurus.
- Martner Fanta, G. D.** (2023). «Pagaré con Vida la Lealtad del Pueblo». *A 50 Años del Derrocamiento de Salvador Allende*. LOM Ediciones.
- Martner García, G.** (1988). *El Gobierno del Presidente Salvador Allende, 1970-1973. Una Evaluación*. Ediciones LAR.
- Prats, C.** (1985). *Memorias. Testimonio de un Soldado*. Editorial Pehuén.
- Senado de Estados Unidos** (1975). *Covert Action in Chile 1963-1973*. U.S. Government Printing Office. <https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf>
- Uliánova, O., y Fediakova, E.** (2023). Algunos Aspectos de la Ayuda Financiera del Partido Comunista de la URSS al Comunismo Chileno durante la Guerra Fría. *Estudios Públicos*, 1 (50 Años), 109-146.  
<https://doi.org/10.38178/07183089/199872113>
- Winn, P.** (2010). *La Revolución Chilena*. LOM Ediciones.